

MATERIA : DESPIDO INJUSTIFICADO.  
DEMANDANTE : MARÍA ISABEL GOMPERTZ PUMARINO.  
DEMANDADA : AGENCIAS UNIVERSALES S.A  
R.U.C. : 19-4-0222984-8.  
R.I.T. : O-1802-2019.

Valparaíso, veintiséis de octubre de dos mil veinte.

PRIMERO: Que ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, comparece doña *María Isabel Gompertz Pumarino*, cédula de identidad N° 10.969.447-9, con domicilio para estos efectos en Avenida Bosques de Montemar N° 1205, comuna de Concón, quien interpuso demanda en juicio ordinario del trabajo por despido injustificado, procedimiento de aplicación general, en contra de la empresa *Agencias Universales S.A.*, representada legalmente por Enrico Martini García, ambos con domicilio en Urriola N° 87, piso 2, Valparaíso.

Expuso así, que: 1. Con fecha 10 de septiembre de 2014, ingresó a prestar servicios para la demandada en calidad de “*Asistente Comercial*”, siendo el promedio de su remuneración mensual, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, la suma de \$1.518.864. 2. Con fecha 31 de julio de 2019, la demandada puso término a su contrato de trabajo invocando como causal la contemplada en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, “*necesidades de la empresa, establecimiento o servicio*”, sin embargo, refiere que dicha causal es improcedente, indicando que un aumento en los costos de operación no constituye una situación objetiva y permanente que haga imposible mantenerla en el cargo.

Además, la relación de hechos es incompleta ya que no contiene detalle o suma alguna que le permita impugnar sus fundamentos.

Asimismo, sostiene que es improcedente el descuento del aporte del empleador a la A.F.C., si en definitiva el tribunal declara que dicho despido es



carente de justificación, citando jurisprudencia al respecto, solicitando, en definitiva, se condene a la demandada al pago de la suma de \$2.278.296, por concepto de recargo legal del 30 % de la indemnización por años de servicio por la improcedencia del despido y a la suma de \$1.463.365, por concepto de devolución de la suma indebidamente descontada de la indemnización por años de servicio por aporte del empleador al Seguro de Cesantía.

**SEGUNDO:** Que la demandada contestó en los siguientes términos: **1.** Que, con fecha 10 de septiembre de 2014, AGUNSA celebró un contrato de trabajo con la demandante de autos, para desempeñarse como *“Asistente Comercial”*, labor que realizó en las dependencias de AGUNSA ubicadas en la ciudad de Puerto Montt, refiriendo que en el mes de febrero de 2019, se trasladó junto a su familia a vivir a la ciudad de Viña del Mar y AGUNSA le mantuvo el cargo y por ende, fue trasladada a las oficinas de la empresa ubicadas en Valparaíso. En cuanto a la remuneración que percibía la demandante, esta se componía de los siguientes haberes: a. Sueldo base por la suma de \$1.364.577 b. Asignación de Alimentación, por la suma de \$7.161 c. Gratificación equivalente a 4,75 ingresos mínimos mensuales de conformidad al artículo 50 del Código del Trabajo, la que se pagaba en dos parcialidades, 60% de la gratificación en el mes de febrero y el 40% en el mes de noviembre de cada año. **2.** Que con fecha 31 de julio de 2019, AGUNSA le hizo entrega de una carta en que se le comunicó la decisión de poner término al contrato de trabajo fundada en la causa de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, fundada en los siguientes hechos: *“los hechos en que se funda la causal invocada, se basan en la reestructuración de los puestos de trabajo al interior de la unidad de Venta y Arriendo de contenedores, consistente en la necesidad de la empresa de rebajar los costos operacionales, por la disminución de operaciones de nuestros clientes haciéndose necesario poner término a su contrato de trabajo”*. **3.** Posteriormente, con fecha 23 de agosto de 2019, las partes suscribieron un finiquito de contrato de trabajo, en el cual la demandante se reservó de manera expresa y



especifica el derecho para reclamar judicialmente la causal de término de contrato de trabajo, el recargo legal sobre la indemnización por años de servicio y el descuento indebido del aporte del empleador al seguro de cesantía y la gratificación. 4. En virtud del finiquito antes señalado, la Sra. Gompertz recibió la suma de \$7.339.647, compuesta por los siguientes haberes: a. Indemnización sustitutiva de aviso previo, la suma de \$1.518.864.- b. Indemnización por años de servicio (5 años), la suma de \$7.594.320.- c. Indemnización feriado proporcional (- 5,5 días), se le descontó la suma de \$250.172.- y, d. Descuento aporte empleador a AFC, se le descontó la suma de \$1.463.365.-

En cuanto a la causal de término invocada, refirió la demandada que los hechos que la fundan son efectivos y dicen relación con aspectos de carácter técnico y económicos, porque atañen a aspectos estructurales de la empresa, específicamente en el área de ventas y arriendo de contenedores, en virtud de los cuales se tuvo que reestructurar dicha área, disminuyendo los puestos de trabajo, en razón de una disminución de la operaciones de los clientes de AGUNSA, indicando que la reestructuración del área de venta de arriendo de contenedores y los hechos en los cuales se fundó, es un hecho efectivo del cual se encuentra en pleno conocimiento la demandante, así como que se puso término al contrato de trabajo de otros trabajadores que desarrollaban labores en la sección de producción

Asimismo, solicitó el rechazo de la demanda en aquella parte en que solicita la devolución del aporte patronal al seguro de cesantía fundado en que la circunstancia que el despido sea justificado o injustificado no es un requisito que exija el artículo 13 de la Ley N° 19.728, sino, lo que exige esa norma es que el contrato haya terminado por algunas de las causales que establece el artículo 161 del Código del Trabajo, mencionando que es un acto jurídico unilateral solemne por el cual el empleador pone término al contrato de trabajo celebrado con el trabajador y cumplidas las formalidades legales, el despido produce el efecto que le es propio, consistente en poner término al contrato de trabajo, que es precisamente el efecto que exige el artículo 13 de la Ley N° 19.728.



Finalmente refirió que las sanciones que establece por el hecho que el despido se declare injustificado, indebido o improcedente, se encuentran expresamente establecidas en la Ley, específicamente en el artículo 168 del Código del Trabajo, consistente en los recargos a la indemnización por años de servicios a que tenga derecho el trabajador, y en ningún caso se establece como sanción la pérdida de la facultad que tiene el empleador para descontar el aporte que realizó a la cuenta individual del seguro de cesantía del trabajador, indicando que las sanciones son de derecho estricto, en razón de lo cual se deben interpretar restrictivamente, no siendo aplicables por analogías y por ende no pudiendo aplicarse a situaciones distintas a aquella para las cuales se encuentran expresamente previstas en la ley.

**TERCERO:** Que el Tribunal fijó los siguientes hechos a probar:

1. Efectividad de concurrir en la especie la causal de necesidades de la empresa esgrimidas por la demandada en la carta de despido en la que se informó a la trabajadora su separación.
2. Monto susceptible de descuento sobre la indemnización por años de servicios como aporte patronal al seguro de cesantía.

**CUARTO:** Que a fin de acreditar sus pretensiones, la parte demandada rindió la siguiente prueba:

***A.- Documental:***

1. Copia del contrato de trabajo celebrado entre María Isabel Gompertz Pumarino y Agencias Universales S.A., con fecha 01 de diciembre.
2. Copia de la carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 31 de julio de 2019.
3. Copia de certificado de saldo de aporte empleador al seguro de cesantía de fecha 23 de junio de 2019.
4. Copia del libro de remuneraciones de AGUNSA, del área de venta y arriendo de Contenedores, Sucursal Valparaíso, correspondiente a los meses de julio, agosto, Septiembre y octubre de 2019.



5. Copia del estado de resultado mensual de Agencias Universales, del área de arriendo y venta de contenedores, Oficina Valparaíso, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019.

6. Copia de estado de resultado anual de Agencias Universales S.A., del área de arriendo y venta de contenedores, Oficina Valparaíso, correspondiente al año 2019.

7. Copia del finiquito de contrato de trabajo celebrado entre AGUNSA y Karen Recabarren Zurita.

8. Contrato de trabajo entre don Álvaro Sergio Escobar y Agencias Universales S.A., con fecha 01 de enero de 2019.

9. Impresión de la página web de Agencias Universales S.A., relativa al servicio de venta y arriendo de contenedores.

***B.- Testimonial:***

1.- ***María Soledad Urenda Del Canto***, cédula de identidad N° 13.989.421-9, nacida el 21 de mayo de 1980, ingeniero comercial, casada, domiciliada en Urriola N° 87, Valparaíso, quien al abogado de la demandada señaló, que trabaja en Agunsa como gerente de personas y desarrollo organizacional desde enero de 2019, refiriendo que conoce a la demandante, quien era trabajadora de la empresa. Ella se desempeñaba como asistente comercial en el área de arriendo y venta de contenedores y tenía que vender y arrendar contenedores. Esas funciones las realizaba en Puerto Montt y luego se trasladó a Valparaíso, mencionando que ella no continúa realizando esas labores porque fue despedida por necesidades de la empresa.

Indicó que esa causal se fundó en que por un tema de restructuración en el período en que fue desvinculada, los ingresos del área de depósito de contenedores en Valparaíso no justificaba el costo que significaba tener a las vendedoras en el área, señalando que por eso se tomó la decisión de restructuración y se eliminaron



las vendedoras de Valparaíso, manifestando que el tema de venta se tomó desde Santiago, principalmente.

Añadió que al final de la relación, se le pagó indemnización por años de servicio y las otras indemnizaciones por vacaciones pendientes.

Al abogado de la parte demandante contestó, que ella se desempeña en gestión de personas, pago de remuneraciones, capacitación y desarrollo cambios de cargo posiciones.

Indicó que la demandante se desempeñaba en el área de ventas y arriendo de contenedores, no recuerda que haya dicho “depósitos”, señalando que la restructuración consistió en que se eliminó el personal que tenía relación de venta y arriendo de contenedores en Valparaíso y se tomó la venta a través de la sucursal de Santiago, que realiza la venta principalmente para Santiago y Valparaíso, sin saber si hay alguna relación de venta con otras sucursales por algún cliente que atiendan por otra sucursal.

La venta de la demandante era principalmente de Valparaíso, explicando que los resultados del área no los ve ella.

**QUINTO:** Que la demandante, rindió la siguiente prueba:

***A.- Documental:***

1. Contrato de trabajo celebrado con fecha 01 de diciembre de 2017 entre las partes del juicio;
2. Copia de la carta de aviso de término de contrato de trabajo de 31 de julio de 2019.

**SEXTO:** Que con estos antecedentes, en el plano fáctico y en el estudio de la prueba rendida, debe considerarse lo dispuesto por el artículo 456 del Código del Trabajo que exige, para establecer como probados determinados hechos y circunstancias, la apreciación de la prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica. Atendido ello, rige el deber de expresar las razones jurídicas, lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se asigna valor o se desestima



cada prueba para luego, con el material probatorio estimado como fiable, idóneo y relevante, fundamentar las conclusiones fácticas a que se arriba en el juicio. El Código del Trabajo, conforme dispone su artículo 459 N° 4, exige considerar la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de la prueba a tales efectos. Así, revisada la fiabilidad de la prueba rendida, es posible fundamentar la decisión en torno a qué hechos se estiman como probados o no y, en la afirmativa, con qué prueba ello ocurre. Desde una perspectiva epistemológica –oportuna al menos para la evaluación global de la prueba–, las proposiciones sostenidas en la etapa de discusión, en el plano fáctico, y siguiendo a GASCÓN<sup>1</sup>, requieren de prueba confirmatoria fiable que no debele instancias relevantes de refutación, considerando su cantidad y variedad, las máximas de experiencia (legales, sociales o científicas) como grado de probabilidad o fundamento cognoscitivo y el número y corrección de los pasos inferenciales que se presenten para confirmar hipótesis considerando, primordialmente, aquellas circunstancias relevantes a las pretensiones en juego sobre las cuales no ha existido controversia o se ha presentado allanamiento (en los términos de los artículos 453 N° 1 –párrafo 7° – y N° 3 –párrafo 2° – del Código del Trabajo), la evidencia preponderante como estándar de evaluación, la interlocutoria de prueba, los principios y reglas de presunción existentes en materia laboral y el *onus probandi* que el caso específico requiere.

**SÉPTIMO:** Que en el contexto apuntado, lo primero a esclarecer dice relación con la impugnación del despido que se ha esgrimido como acción principal, considerando para ello que el *onus probandi*, en tanto acreditar los hechos contenidos en la carta de despido, recaen en la parte demandada, esto es, el empleador demandado.

En este sentido es dable señalar que la prueba rendida por la parte demandada resultó deficiente e insuficiente para acreditar los hechos en que fundó la causal de despido de la demandante, sin que este tribunal haya logrado formar convicción sobre dicho tópico, atendida la falta de coherencia externa entre los

---

<sup>1</sup> GASCÓN. Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba. Ed. Marcial Pons. 2004.



medios probatorios incorporados y poca fiabilidad de los mismos, según se analizará a continuación.

En efecto, en relación al *contrato de trabajo celebrado entre María Isabel Gompertz Pumarino y Agencias Universales S.A., con fecha 01 de diciembre de 2017*, incorporado por ambas partes, éste permitió establecer la fecha de inicio de la relación laboral y las diversas cláusulas que las partes acordaron regularían la misma, sin que haya existido controversia sobre dichos aspectos, de modo que tal documento ningún aporte eficiente efectúa a fin acreditar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos fijados por el Tribunal.

Por su parte, *la copia de la carta de aviso de término de contrato de trabajo de fecha 31 de julio de 2019*, también incorporada por ambas partes, permitió establecer el contenido fáctico que la demandada se encontraba obligada a acreditar en la audiencia de juicio, consistente en los hechos descritos en dicho instrumento, es decir, que la reestructuración de los puestos de trabajo al interior de la unidad de Venta y Arriendo de contenedores, se fundaba en la necesidad de la empresa de rebajar los costos operacionales, por la disminución de operaciones de nuestros clientes, lo que hizo necesario poner término al contrato de trabajo de la demandante..

Para los fines enunciados, la parte demandada incorporó, además, *copia del libro de remuneraciones de AGUNSA, del área de venta y arriendo de Contenedores, Sucursal Valparaíso, correspondiente a los meses de julio, agosto, Septiembre y octubre de 2019*, en el cual, consta que a partir del mes de agosto, dicho documento no considera a la demandante de autos, ni se aprecia que se haya contratado a otra persona en su reemplazo, constatándose que el trabajador *Álvaro Sergio Escobar Castro*, el cual aparece en dicho documento, fue contratado por la empresa demandada en el mes de enero del año 2019, según se pudo establecer con la respectiva *copia de contrato de trabajo incorporada por la parte demandada*.





Los documentos recientemente analizados dan cuenta de lo que se podría denominar una reestructuración en el área en que trabajaba la demandante, por cuanto no consta, como se dijo, que ésta haya sido reemplazada por otro trabajador, sin perjuicio de las contradicciones que serán evidenciadas al momento de analizar la prueba testimonial de la demandada.

No obstante lo anterior, de extrema relevancia resultaba establecer que dicha reestructuración obedeció a una disminución en las operaciones de los clientes de la demandada.

En dicho sentido, la demandada incorporó también en la audiencia de juicio, prueba documental que dicha parte denomina ***copias de estado de resultado mensual de Agencias Universales, del área de arriendo y venta de contenedores, Oficina Valparaíso, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 y copia de estado de resultado anual de Agencias Universales S.A., del área de arriendo y venta de contenedores, Oficina Valparaíso, correspondiente al año 2019.***

Es necesario señalar que dichos documentos no permitieron lograr convicción por este sentenciador, de las supuestas mermas, descritas en dichos documentos, en los ingresos en el área en que se desempeñaba la demandante, por cuanto, en primer término, ningún antecedente se aportó en relación al origen de dichos documentos ni la fuente desde la cual se obtuvieron dichos datos.

Asimismo, si bien contienen una firma, esta resulta ilegible y no se consigna en los mismos, quién los habría elaborado, sin que su autor haya comparecido en juicio a fin de explicar al tribunal los alcances y fundamentos de dicha documentación, no incorporándose tampoco los instrumentos contables que reflejan dicho análisis, ni el testimonio de un testigo experto o perito que ilustrara al tribunal sobre la fiabilidad de la información contenida en los mismos, todo lo cual



restó valor probatorio a éstos y no permitió, en definitiva, tener por acreditados los asertos de la demandada sobre aquellos tópicos.

Por su parte, la *impresión de la página web de Agencias Universales S.A.*, incorporada por la demandada, si bien da cuenta de los servicios que ésta presta, de modo alguno contiene información relevante sobre el tema en análisis, misma situación que ocurrió con la *copia del finiquito de contrato de trabajo celebrado entre AGUNSA y Karen Recabarren Zurita*, de fecha 31 de julio de 2019, el cual no resulta suficiente para acreditar, por sí mismo, la causal invocada por el demandado, toda vez que no señala los hechos en que se fundó dicha desvinculación ni menos, la efectividad de los mismos.

Finalmente, en cuanto a la prueba testimonial incorporada por la parte demandada, consistente en el relato de la deponente *María Soledad Urenda Del Canto*, quien se desempeña como gerente de personas y desarrollo organizacional, no tuvo la contundencia suficiente para acreditar los hechos que fundan causal invocada por la parte demandante para despedir a la actora, por cuanto, en primer lugar, su relato se contradice con la demás prueba documental analizada previamente, toda vez que ella aseguró en juicio que la reestructuración que se efectuó al interior de la empresa demandada consistió en la eliminación de las vendedoras de Valparaíso, centralizándose dicha gestión desde la ciudad de Santiago, mientras que los libros de remuneraciones incorporados, dieron cuenta que solo la demandada fue despedida en esa área, al menos hasta la época que se consigna en los mismos, sin que se pudiera dilucidar, con su relato, dicha controversia.

Además, si bien ésta refirió que los ingresos del área no justificaban el costo de mantener las vendedoras de la ciudad de Valparaíso, al ser consultada con mayor detalle sobre aquello, ésta refirió que “*los resultados del área no los ve ella*”, demostrando su falta de conocimiento respecto de las mermas económicas que habrían justificado el despido de la actora.



En consecuencia, tal como se ha venido diciendo, la demandada no logró probar la existencia de una necesidad financiera que justificara el proceso de reestructuración aludido en su carta de despido, lo cual necesariamente, lleva a acoger esta pretensión de la demandante.

A mayor abundamiento, cabe señalar que la respectiva carta no explica la situación específica de la actora respecto de otras personas que se desempeñaban en su misma labor y, entonces, tampoco se constituye como suficiente fundamento para el despido de la misma.

Asimismo, la carta no explica, cómo el despido de ésta era la única vía razonable para la reestructuración y supuesta medida de contingencia financiera.

En este sentido, la doctrina afirma, considerando los términos del mensaje de la ley que la introdujo en la legislación y la respectiva discusión parlamentaria, que la causal autoriza al empleador a despedir cuando *no puede mantener la fuente laboral* por motivos de naturaleza objetiva; en razón de lo anterior, los hechos que la constituyen deben ser ajenos a la voluntad de las partes, pues apunta a que el trabajador sea desvinculado por mociones objetivas<sup>2</sup>.

**OCTAVO:** Que en cuanto a las remuneraciones pretendidas como base de cálculo al tenor del artículo 172 del Código del Trabajo, cabe señalar que no existió controversia entre las partes sobre este aspecto, razón por la cual se establecerá en la suma de **\$1.518.864**.

**NOVENO:** Que en cuanto al descuento practicado a la actora al tenor de lo previsto por el artículo 13 de la Ley N° 19.728, según el finiquito incorporado, cabe señalar que, habiéndose acogido la pretensión de la demanda en orden a declarar el despido como injustificado, aquel debe ser reincorporado a la compensación de término de vínculo laboral que procede respecto de la trabajadora demandante, considerando para tales efectos que la hipótesis fáctica prevista en la Ley N° 19.728 para consagrar el descuento decae en la medida

---

<sup>2</sup> LANATA. Contrato individual de trabajo. 4° edición. Legal Publishing. 2010. P.283.



que el despido no se ve amparado por la causal pretendida por la demandada, quien no logró acreditar los hechos que justificaban la misma.

Así, como ha indicado la Excma. Corte Suprema, entre muchos otros, en los roles de unificación N° 65.375-2016, N° 4.059-2017 y, específicamente, en el N° 43.226-2017 “...si la sentencia declara injustificado el despido priva de base a la aplicación del inciso segundo del [artículo 13 de la Ley N° 19.728](#). La indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el [artículo 161 del Código del Trabajo](#). En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728. Adicionalmente, si se considerara la interpretación contraria, constituiría un incentivo a invocar una causal errada validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza, por cuanto significaría que un despido injustificado, en razón de una causal impropia, produciría efectos que benefician a quien lo practica, a pesar que la sentencia declare la causal improcedente e injustificada. Mal podría validarse la imputación a la indemnización si lo que justifica ese efecto ha sido declarado injustificado, entenderlo de otra manera tendría como consecuencia que declarada injustificada la causa de la imputación, se le otorgará validez al efecto, logrando así una inconsistencia, pues el despido sería injustificado, pero la imputación, consecuencia del término por necesidades de la empresa, mantendría su eficacia. Para resolver se debe tener en consideración el objetivo del legislador al establecer el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 19.728, que no ha sido otro que favorecer al empleador en casos en que se ve enfrentado a problemas en relación con la subsistencia de la empresa, con una suerte de beneficio cuando debe responder de las indemnizaciones relativas al artículo 161 del Código del Trabajo. Es así como, tratándose de una prerrogativa, debe ser considerada como una excepción, y por lo tanto, su aplicación debe hacerse en forma restrictiva, lo que



lleva a concluir que sólo puede proceder cuando se configuran los presupuestos del artículo 161 mencionado, esto es, cuando el despido del trabajador se debe a necesidades de la empresa que hacen necesaria la separación de uno o más trabajadores, de manera que, cuando por sentencia judicial se ha declarado que tal despido carece de causa, no es posible que el empleador se vea beneficiado, siendo autorizado para imputar a la indemnización por años de servicio, lo aportado al seguro de cesantía” .

**DÉCIMO:** Que, en consecuencia, se accederá a los montos requeridos en el libelo de autos, de forma tal que se condenará a la demandada, al pago, por concepto de recargo legal del 30%, a la suma de \$2.278.296.- y, por descuento ilegal del artículo 13 de la Ley N° 19.728, a la suma de \$1.463.365, monto que se obtuvo de la ***copia de certificado de saldo de aporte empleador al seguro de cesantía de fecha 23 de junio de 2019***, incorporado por la demandada.

**UNDÉCIMO:** Que, habiendo sido totalmente vencida la demandada, y conforme con lo previsto por el artículo 144 inciso 1° del Código de Procedimiento Civil, se le condenará en costas, regulándose las personales en el 10% del total de las sumas solicitadas por la actora.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 a 11, 41, 42, 44, 54 a 58, 161 inciso 1° , 162, 163, 168, 172, 173, 176, 178, 415, 420, 423, 425 a 432, 434 a 438, 440 a 462 del Código del Trabajo; se resuelve:

**I. QUE SE ACOGE** la demanda interpuesta por ***María Isabel Gompertz Pumarino***, en contra de ***Agencias Universales S.A.***, todos ya individualizados, por lo que se declara que el despido de la demandante ha sido injustificado, debiendo la demandada pagar:

i) Por concepto de recargo legal del 30% del artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, la suma de **\$2.278.296.-**

ii) Por restitución del descuento ilegal del artículo 13 de la Ley N° 19.728, la suma de **\$1.463.365.**



II. Que las sumas referidas deberán ser incrementadas conforme lo disponen los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

III. Que se condena en costas a la demandada por haber resultado totalmente vencida, regulándose la misma en un 10% del total de lo obtenido en el presente juicio.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en ella dentro de quinto día, en caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza respectivo.

Devuélvase a las partes las pruebas aportadas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

*R.U.C. : 19-4-0222984-8.*

*R.I.T.: O-1802-2019.*

Sentencia dictada por don *José Antonio Cifuentes Gil*, Juez Destinado del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso.

